

Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-688-2022 del Primer Juzgado Civil de Valdivia, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el demandante, condenado al Fisco de Chile a pagar la suma de treinta y cinco millones de pesos. (\$35.000.000)

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Valdivia, por sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la confirmó con declaración que rebajó el monto a indemnizar a la suma de diez millones de pesos (\$ 10.000.000).

En contra de esa sentencia, el demandante dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

1º) Que, el demandante denuncia como infringidos los artículos 1698 del Código Civil, y 1º y 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Señala que no existe el déficit probatorio que se denuncia en la sentencia recurrida y que motivó la disminución del monto otorgado a título de indemnización, ya que rindió prueba, tal como informes psicológicos, certificados emitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Valech y prueba testimonial, que permiten acreditar la detención ilegal, tortura y secuelas posteriores que constituyen el daño moral cuya indemnización demanda. Expone que el fallo no da cuenta de la actividad probatoria desplegada e invoca una discrecionalidad por considerarse que el actor no merece ser indemnizado en una



forma similar a la establecida respecto de otros ex presos políticos que vivieron una experiencia de torturas físicas y psicológicas de parte de agentes del Estado de características muy similares y respecto de los cuales se desplegó una actividad probatoria muy similar y de la misma envergadura y calidad.

Añade que los estándares indemnizatorios establecidos para casos similares por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, oscilan entre los \$20.000.000 y \$60.000.000, que en este caso se otorgó \$10.000.000, y que la rebaja no cuenta con argumentación y razonamiento que la respalde, afectándose con ello la igualdad ante la ley.

Pide se invalide la sentencia recurrida y se dicte la pertinente sentencia de reemplazo conforme a la ley, que confirme, sin declaración, la sentencia de primera instancia.

2°) Que, de la lectura del recurso se aprecia que lo que se reprocha del fallo del Tribunal de Alzada es haber rebajado la indemnización por el daño moral padecido por el actor, sin embargo, tal decisión no configura la causal invocada por el demandante. En efecto, lo que cuestiona el recurrente no es el error de derecho, sino que la falta de valoración de la prueba que acompañó y rindió en el juicio, no invocando en su arbitrio, una infracción a leyes reguladoras de la prueba. Por otra parte, la norma que se invoca como vulnerada, el artículo 1698 del Código Civil, según la uniforme y reiterada jurisprudencia de esta Sala Penal, carece del carácter de decisoria litis.

3°) Que, en cuanto al principio de igualdad ante la Ley, denunciado como infringido por el recurrente, este no explica la manera en que el fallo impugnado



incurre en dicho error, el citar otros casos, sin exponer las similitudes que presentan con el suyo y sólo mencionar el monto a que fue condenado el Fisco de Chile, lo que no resulta suficiente, de manera que no se encuentra acreditado el vicio denunciado.

4°) Que, habiendo advertido, sin embargo, este tribunal, durante el estado de acuerdo que conforme a los antecedentes del recurso, el fallo impugnado adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, que permite en estas circunstancias, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, procederá esta Corte, a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho y a los hechos de la causa, por los siguientes motivos.

5°) Que, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber rebajado la indemnización por el daño moral padecido por el demandante, sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial.

6°) Que, las razones expuestas por los sentenciadores para rebajar el monto de la indemnización decretado, se establecieron al señalar;

“...Y teniendo además presente que de la prueba rendida, surgen inconsistencias con lo que se lee en la demanda, en cuanto al tiempo durante el cual se extendió la privación de libertad del demandante, se CONFIRMA la sentencia definitiva apelada de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, con declaración que se fija el monto indemnizatorio en la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos).”



7º) Que, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *—en lo que atañe al presente recurso—* en su numeral 4º, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

8º) Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5º transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que, si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos



comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida –*prosigue el Auto Acordado*- deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe enseguida que, una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

9°) Que, la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

10°) Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de



Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

11º) Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley



por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

12°) Que, al dictar la sentencia impugnada, los sentenciadores han confirmado la sentencia apelada con declaración que se rebaja el monto de la indemnización por daño moral a la suma de \$10.000.000, sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a rebajar el monto ordenado pagar al Fisco de Chile por el tribunal de primera instancia, haciendo referencia a una insuficiencia probatoria, mas sin desarrollo.

La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto y acreditado por el actor, dado que para una adecuada resolución del asunto era imperativo analizar los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron al demandante, en atención a que la controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile con su actuar causaron al recurrente.

Por otra parte, no hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.



13°) Que, como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación consagrada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, porque no acata la exigencia del literal N° 4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

14°) Que, las deficiencias detectadas no pueden subsanarse sino con la invalidación del fallo que la contiene, por lo que esta Corte, de oficio, procederá a anularlo, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho y a los hechos de la causa.

Y de acuerdo, además, con lo previsto en los artículos 764, 765, 766, 767, 775 y 786 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza el recurso de casación** en el fondo deducido, y **se invalida de oficio**, la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

Rol N° 218.057-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Ministras Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H. y María Soledad Melo L., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorlari G. Santiago, 28 de abril de 2025.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 28/04/2025 12:26:35

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 28/04/2025 12:26:36

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 28/04/2025 12:26:37

MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRA
Fecha: 28/04/2025 12:01:55

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 28/04/2025 12:04:17



En Santiago, a veintiocho de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Se reproduce la sentencia en alzada y del fallo de casación que precede, se reiteran sus motivos quinto a décimo cuarto.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, la indemnización del daño producido y la acción para hacerla efectiva, son de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, pues comprometen el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo mandata la aplicación de buena fe de los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de Derecho Internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados;

2º) Que, para los efectos de la determinación del daño reclamado, es conveniente tener en cuenta que el daño moral consiste en la lesión o agravio,



efectuado culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. Como lo ha señalado anteriormente esta Corte, entre otros, en el pronunciamiento Rol N° 17.842-2019, de fecha 11 de octubre de 2019, el menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y porque su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado;

3°) Que, en este entendido, acreditados como han sido los hechos denunciados, el contexto en que se perpetraron y la participación culpable y penada por la ley de los agentes del Estado que intervinieron, surge la efectividad del padecimiento del daño moral, de manera que el Estado debe reparar ese detrimento, por el hecho de sus agentes, cuya determinación concierne a la prudencia del tribunal, y no podría ser de otro modo porque materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que le provocaron al actor su detención y sometimientos a torturas y apremios ilegítimos;



4°) Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, deba necesariamente realizarse prudencialmente, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión;

5°) Que, sobre la materia el artículo 24, párrafos 1 y 4, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establece: “1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. (...) 4. Los Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada. (...)”. En tanto, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.



Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (...);

6°) Que, para desarrollar el contenido de estos elementos resulta imperativo recurrir a una fuente de “soft law”, las que según el autor Enrique Lagos, (“Algunas tendencias del Derecho Internacional a principios del S. XXI”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. V, 2005, p. 320) constituyen “(...) el derecho que generalmente se expresa a través de declaraciones y resoluciones y acuerdos ejecutivos, abarcando una vastedad de temas y, dentro de este contexto, haciendo posible un marco de referencia temporal, necesario en una sociedad en permanente cambio, frente a la ausencia de normas consolidadas en tratados o a través de la costumbre”;

7°) Que, entre las fuentes de “soft law”, útil resulta considerar la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147, de 16 de diciembre de 2005, que lleva por título “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, la cual ha sido previamente aplicada por esta Corte (SCS N°29.944-2018 de 26 de marzo de 2019, N.º 29.643- 2018 de 26 de marzo de 2019 y, N.º 20.362-2018 de 15 de enero de 2019; N° 147.560-2022 de 14 de diciembre de 2023).

El Principio VII, de la citada Resolución, en su numeral 11, señala: “*Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de*



derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”.

Por su parte, en el Principio IX, de la ya referida Resolución que trata sobre la “Reparación de los daños sufridos” indica bajo el numeral 15: *“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima”.*

En tanto, bajo el numeral 18 de este Principio IX., se afirma el siguiente subprincipio: *“Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de*



violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.

El subprincipio 20 del mismo Principio IX., señala: *“La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”;*

8º) Que, en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al dictaminar que *“[...] no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, además, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada.* (Cfr. CORTE LD.H., Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie CN” 22, Párr. 58);

9º) Que, apreciando las probanzas rendidas, sumado a que no resultó controvertido que el demandante estuvo detenido, sufriendo golpes y torturas, las



cuales se extendieron por veintinueve días en total, además de haber sido reconocido como víctima por la Comisión Valech, además en cuanto a la extensión del daño estableció en su considerando noveno que; *“Que, la prueba documental rendida, en especial, el informe practicado el psicólogo (PRAIS) Alejandra Henríquez Prieto, arriba al siguiente diagnóstico y conclusiones: “ ...[] A partir de la entrevista clínica, se pueden apreciar indicadores de daño psicológico como respuesta a la detención y privación de libertad, además de las torturas físicas y las amenazas y amedrentamientos que sufrió junto a su padre, configurando un proceso de traumatización extrema . ” Por tanto, la vivencia de sufrimiento por la privación de libertad y malos tratos es constitutivo de daño moral o extrapatrimonial”.*

10°) Que, la naturaleza del daño moral de que se trata, obliga a que la determinación del monto dinerario que permita de algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que su determinación sea realizada *prudencialmente*, ante la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa evaluación sea arbitraria o antojadiza, sino, por el contrario, que ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación, fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin duda le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo



alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a esa decisión, toda vez que de ese modo se justifica lo que se manda a pagar por el fallo.

11º) Que, llevado el análisis al caso de marras, es posible colegir que el monto indemnizatorio fijado en autos por concepto de daño moral en favor del demandante civil, debe considerar las circunstancias fácticas de la detención del demandante, no puede estar circunscrita únicamente a la privación de libertad, sino que además a las condiciones en que se ejecutó la misma, en el presente caso, fue torturado y detenido junto a su padre.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10, 40 y 425 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 de la Constitución Política de la República y 170, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se decide:

Se **confirma** la sentencia apelada de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado Civil de Valdivia rol C-688-2022.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

Rol N° 218.057-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Ministras Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H. y María Soledad Melo L., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorlari G. Santiago, 28 de abril de 2025



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 28/04/2025 12:26:38

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 28/04/2025 12:26:38

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 28/04/2025 12:26:39

MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRA
Fecha: 28/04/2025 12:01:56

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 28/04/2025 12:04:18



En Santiago, a veintiocho de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

